



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Medellín, tres (03) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

PROCESO	ACCIÓN DE TUTELA
RADICADO	05001-31-05-007-2022-00425-00
PROVIDENCIA	SENTENCIA DE TUTELA No. 162 de 2022
ACCIONANTE	JUANA MELIDA CORDOBA CORREA C.C. 26.290.120
ACCIONADO	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –DIRECCIÓN GENERAL.
TEMAS Y SUBTEMAS	DERECHO DE PETICIÓN INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DECISIÓN	HECHO SUPERADO

La señora JUANA MELIDA CORDOBA CORREA, identificada con la C.C. 26.290.120, con base en la facultad que le otorga el artículo 86 de la Constitución Política y su Decreto Reglamentario 2591 de 1991, promovió acción de tutela con el fin de que se le proteja su derecho constitucional de petición; que considera vulnerado por LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, bajo la dirección general de la Dra. MARIA PATRICA TOBON YAGARI y la Dra. CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES, como directora de reparaciones -o quienes hagan sus veces- y/o responsables, al momento de la notificación de la presente acción, con base en los siguientes,

HECHOS

Manifiesta la parte actora que interpuso una petición el 30 de agosto de 2022, solicitando el resultado de la aplicación del método técnico de focalización y priorización de la indemnización con el porcentaje asignado y el pago de la indemnización administrativa por desplazamiento forzado a que considera tiene derecho según la Ley 1448 de 2011 y la Resoluciones Nos. 01958 de 2018 y ,1049 de 2019, la Circular 00025 de 2018 y la Resolución 00582 de 26 de abril del 2021, pero reprocha que no ha recibido respuesta de la entidad accionada y ya pasados lo términos legales para hacerlo.

PETICIÓN

Consecuencialmente, la tutelante, solicitó se ordene a la entidad accionada que proceda a dar respuesta de fondo a la petición que se presentó el 30 de agosto de 2022, y se le ordene a que le dé el resultado de la aplicación del método técnico de focalización y priorización de la indemnización con el porcentaje asignado y el pago de la indemnización administrativa por desplazamiento forzado a que considera tiene derecho según la normatividad que lo regula.

ACTUACIÓN DEL DESPACHO

Por reunir los requisitos descritos en el Decreto 2591 de 1991, Decreto 306 de 1992 Decreto 1834 de 2015 “Por el cual se adiciona el Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Justicia y del Derecho, y se reglamenta parcialmente el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en lo relativo a las reglas de reparto para acciones de tutela masivas”, el Decreto 1983 de 2017 y Decreto 333 de 2021. La acción constitucional antes descrita se admitió por auto del 24 de octubre de 2022, y por oficio de la misma fecha, se notificó a la entidad accionada, a quien además se les solicitó brindar la información pertinente sobre el asunto que nos convoca.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD ACCIONADA

La **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**, allegó escrito de respuesta, el 27 de octubre de la presente anualidad, advierte que a través de la comunicación con Radicado No. 2022-0614595-1 de la misma data, la solicitud de la actora fue atendida de fondo a su vez por medio de la Resolución N°. 04102019-1459588 del 16 de febrero de 2022 notificada por aviso con fecha de fijación de 18 de marzo y desfijación de 28 de marzo de 2022, en la que se le decidió en su favor (i) reconocer la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de Desplazamiento Forzado, y (ii) aplicar el “Método Técnico de Priorización” con el fin de determinar el orden de entrega de los recursos. Y le indica a su vez que el Método Técnico de Priorización, en su caso particular, se aplicará en el 31 de julio del año 2023.

En ese sentido, le aclara a la parte actora la imposibilidad de determinar fecha cierta para el desembolso de la reparación reconocida, a propósito de los criterios exigidos normativamente para ser priorizada, luego de hacer un recuento jurisprudencial sobre el asunto, reitera que ha actuado con observancia al debido proceso administrativo.

Por lo anterior, solicita la entidad que, dado que ya emitió respuesta de fondo al derecho de petición en mención, se nieguen las pretensiones de la tutelante.

PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

El problema jurídico a resolver consiste en determinar si la entidad accionada ¿vulneró el derecho fundamental de petición a la accionante, al omitir dar respuesta de fondo a la petición elevada el 30 de agosto de 2022, encaminada a obtener el resultado de la aplicación del método técnico de focalización y priorización de la indemnización con el porcentaje asignado y el pago de la indemnización administrativa por desplazamiento forzado a que considera tiene derecho según la normatividad que lo regula?

ACERVO PROBATORIO

ACCIONANTE

- Derecho de petición del 30 de agosto de 2022.
- Copia de la cédula a de ciudadanía de la accionante.
- Historia Clínica de la tutelante, expedida por el Hospital Pablo Tobón Uribe. del 22 de octubre de 2021.

UARIV

-Respuesta a derecho de petición bajo radicado N° 2022-0614595-1 del 27 de octubre de 2022 de 2022, y enviado al correo:
COLOMBIAESDECOLORES@GMAIL.COM

-Resolución N°. 04102019-1459588 del 16 de febrero de 2022. "Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnización administrativa a la que hacen referencia los artículos 132 de la Ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1.y siguientes del Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015" y la citación y aviso respectivos.

Anexo

-Resolución 1810 de 2022 "Por la cual se hace un encargo de funciones en la planta global de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas".

PREMISAS NORMATIVAS

Procedencia de la Acción de Tutela: El Despacho verificó el cumplimiento del presupuesto de legitimidad por activa, referente a la posibilidad de que toda persona podrá presentar acción de tutela ante los jueces para procurar la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular. Ello conforme lo indica el artículo 86 de la Constitución Política, y en consonancia con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991. Así mismo, se verificó, la legitimación por pasiva, entendida como "*la capacidad legal de quien es el destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, una vez se acredite la misma en el proceso*", según sentencias de la Corte Constitucional T-373 y T-098 de 2015. Y conforme a los artículos 1° y 42 del Decreto 2591 de 1991, en tanto que la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública, razón por la cual también se cumple con este requisito en la presente acción.

En lo atinente a los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, se observa también su cumplimiento, en la medida que la petición fue radicada el pasado 30 de agosto de 2022, pasado más de un mes de la fecha de la interposición de esta tutela, sin que hubiese respuesta alguna; mecanismo idóneo entonces para implorar el derecho fundamental de petición, inmerso en la solicitud en cuestión.

El Derecho de Petición: Teniendo en cuenta que el objeto de la presente acción de tutela es que se proteja la aparente vulneración del derecho fundamental de petición, entre otros, es necesario iniciar indicando, que éste se encuentra contenido expresamente en el artículo 23 de la Constitución, por el cual toda persona puede "*presentar peticiones respetuosas ante las autoridades*" o ante particulares en los precisos términos que señala la ley con el fin de "*obtener pronta resolución*".

Ahora bien, como la respuesta que llegare a brindar la entidad accionada debe cumplir las reglas básicas del derecho de petición, las cuales fueron resumidas por la Corte Constitucional en variadas sentencias, en donde el precepto de oportunidad, se configura mientras se cumplan los términos procesales para dar una respuesta a la petición, de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015, que modificó la Ley 1437 de 2011, donde se estableció como término general 15 días hábiles, sin desconocer además, del presupuesto ya indicado, el de oportunidad, así mismo, la claridad, la precisión y la congruencia; obligación que le asiste a la entidad accionada, sin que eso quiera decir, que todas las solicitudes deban resolverse atendiendo a las exigencias y condiciones de quien

eleva la petición, por cuanto las diferencias de criterio sobre la solución, entre la parte actora y su destinatario, podrán ser objeto del ejercicio de peticiones más especializadas (petición-demanda), para definir a quien le asiste la razón legal. Según Sentencias C-418 de 2017 y T-077 de 2018, entre otras. Empero, la respuesta allegada deberá reflejar claridad, precisión y congruencia, sobre lo que se solicita, es decir, sin confusiones ni ambigüedades, existiendo concordancia con lo solicitado en la petición, y finalmente, notificada a la solicitante.

Carencia Actual de Objeto por Hecho Superado: Teniendo en cuenta que en el presente caso se cuenta con una solución a la petición elevada por el accionante, que se constata por el despacho, es una respuesta de fondo a lo solicitado, se recuerda que la Corte Constitucional se había pronunciado en la Sentencia T-013 de 2017, sobre el tema de la carencia actual de objeto, donde manifestó en relación con el hecho superado que, éste se consolida una vez desaparece "(...) la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado", perdiendo este mecanismo constitucional, toda razón de ser como el medio judicial adecuado para la protección invocada. En ese sentido se destaca, como el concepto de la carencia actual de objeto, tiene como particularidad fundamental, lo cual es que la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surtiría ningún efecto, según lo reitera la Corte Constitucional, verbigracia, en la Sentencia T-358 de 2014. y en especial, lo proferido mediante una línea jurisprudencial más reciente, en la Sentencia T-070 de 2018, donde se enfatiza frente al fenómeno del hecho superado, las reglas jurisprudenciales aplicables a situaciones en las cuales se configura una carencia actual de objeto por hecho superado, tal como ocurre en este caso concreto. No obstante, el juez de conocimiento no debe omitir su deber de demostrar la satisfacción de las pretensiones en la acción de tutela.

CASO EN CONCRETO

La señora JUANA MELIDA CORDOBA CORREA, requiere que se le proteja el derecho fundamental de petición invocado, encaminado a obtener el resultado de la aplicación del método técnico de focalización y priorización de la indemnización con el porcentaje asignado y el pago de la indemnización administrativa por desplazamiento forzado a que considera tiene derecho según la normatividad que lo regula.

Dentro del escrito de tutela, la entidad accionada acreditó mediante la comunicación N° 2022-0614595-1 del 27 de octubre de 2022, que ya había dado respuesta de fondo a la tutelante, a la dirección electrónica de la actora, misma proporcionada en la presente acción constitucional: COLOMBIAESDECOLORES@GMAIL.COM, reiterando que la indemnización solicitada ya fue reconocida mediante Resolución N°. 04102019-1459588 del 16 de febrero de 2022, y dado que no se acreditó una de las situaciones descritas como de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad para priorizar la entrega, no se podrá determinar la fecha de pago de la indemnización solicitada, según la Resolución 1049 de 2019 e insiste que no es posible realizar el desembolso de la medida de indemnización, aclarando que el método correspondiente se programó para aplicarse el 31 de julio de 2023.

En ese sentido, para esta instancia la petición radicada por la accionante el día el 30 de agosto de 2022, ya fue satisfecha en la medida que se le explicó por qué no era posible determinar una fecha precisa para la entrega de la indemnización solicitada y reconocida. No significando con ello que se esté vulnerando derecho

alguno, y considerando además que la aplicación del Método Técnico de Priorización, programado para el 31 de julio de 2023.

En ese sentido, aclara esta instancia que las decisiones propias de la accionada como lo son: el reconocimiento y pago de la indemnización administrativa, la cuantía, vigencia, términos y condiciones de su entrega, ruta a definir, es competencia de esa entidad, las cuales son verificadas, estudiadas, medidas y tasadas conforme la Ley 1448 de 2011, el Decreto 1084 de 2015, la Resolución 01049 de 15 de marzo de 2019 y Resolución 582 de 2021, la cuales tuvieron lugar como consecuencia de la orden proferida por la Corte Constitucional, al interior del Auto 206 de 2017, y demás decretos reglamentarios que lo regulan; advirtiéndole que en el caso en concreto, no puede ser esto óbice para dilatar las respuestas incoadas por las personas víctimas del desplazamiento forzado y de la violencia de nuestro país, de forma indefinida. No obstante, en la situación planteada, el problema deriva en que la tutelante debe someterse a la aplicación del Método Técnico de Priorización, según corresponda y dada la fecha programada para su aplicación. De ahí la imposibilidad e improcedencia de esta agencia judicial para ordenar este tipo de solicitudes.

Así las cosas, no advierte el Despacho que a la fecha exista vulneración alguna a los derechos de la accionante, toda vez que se encuentra acreditado que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, dio trámite a su solicitud informando sobre la imposibilidad de indicar una fecha determinada del pago de la indemnización reconocida hasta tanto se surta el Método Técnico de Priorización, programado para el 31 de julio de 2023 y el cual está debe someterse a espera de resultados; debiendo entenderse satisfecha la petición, que no solo ocurre cuando se emite una respuesta acorde a los intereses del solicitante, configurándose en tal sentido, la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO.

Esta providencia puede ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, pero de no ocurrir así, se remitirá a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, acorde con lo dispuesto en el inciso 2, artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO SÉPTIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO, frente a la vulneración de los derechos fundamentales invocados en la acción constitucional instaurada por JUANA MELIDA CORDOBA CORREA, identificada con la C.C. 26.290.120, en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, bajo la dirección general de la Dra. MARIA PATRICA TOBON YAGARI y la Dra. CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES, como directora de reparaciones -o quienes hagan sus veces- y/o responsables, al momento de la notificación de la presente acción, por las razones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes el presente fallo en la forma prevista en el artículo 30 del citado Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional, si la decisión adoptada no fuere impugnada dentro del término legal.

CUARTO: ARCHIVAR el expediente, una vez regrese de la Corte Constitucional.

NOTIFÍQUESE

**CAROLINA MONTOYA LONDOÑO
JUEZA**

Firmado Por:
Carolina Montoya Londoño
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Laboral 007
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1873ad36dfce0464509f9cc7ead561eacfd9f84d164a84941379413afaa3e604**

Documento generado en 03/11/2022 09:10:22 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>